

Coyuntura

Revista Mensual

Nº 6 - San Salvador, octubre-noviembre de 2004 - Año 8



FUNSALPRODESE

Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico

27 Calle Poniente y 17 Avenida Norte, #1434,
Colonia Layco, San Salvador, El Salvador, C. A.

Apartado Postal 1952, Centro de Gobierno,
San Salvador

Teléfonos: +503-225-2722,
225-0414, 225-0416, 225-1212

Fax: +503-225-5261

Correo electrónico:
infofunsal@funsalprodese.org.sv

Página Web: www.funsalprodese.org.sv

ECONOMÍA SALVADOREÑA EN CALLEJÓN SIN SALIDA

Por algún tiempo las opiniones de los defensores del neoliberalismo fuera del gobierno compartían con los voceros gubernamentales que la desaceleración de la economía era consecuencia de causas externas. Por diez años han repetido las supuestas causas externas de diferente manera para no “favorecer” a los “rojos”; hasta que la realidad los ha obligado a romper el cerco del silencio y las mentiras voluntariamente aceptadas.

Después de años de manejo con fines políticos, y electorales en particular, acerca de la “larga desaceleración económica”, y no obstante el maquillaje de las estadísticas por parte del Banco Central de Reserva, BCR, con eso de que la responsabilidad recae sobre causas externas, al gobierno se le ha agotado la falsa espera de la reanimación de la economía y ha tenido que prácticamente gritar que el “talón de Aquiles” es el lento crecimiento económico. Sin atreverse a renunciar a la fábula de la estabilidad macroeconómica que exhiben como el más gran logro de quince años del gobierno de ARENA.

Sin embargo, FUSADES y en parte el BCR, al que todos se remiten como a una resonancia magnética aplicada a la economía, presenta indicadores económicos que niegan la leyenda de la estabilidad:

- a) El crecimiento económico para 2004 será de 1.4%; menor al 1.8% de 2003;
- b) El crecimiento total de ventas de la economía ha sido cero. Pues el número de empresas que vendieron más fue similar al de empresas que vendieron menos;
- c) La inflación o el aumento de precios, hasta septiembre de 2004, aumentó en 5.3%, contra 2.1% de aumento a septiembre del 2003: Los precios de

- los alimentos aumentaron 7.5% más que la inflación;
- d) El endeudamiento del sector público no financiero (SPNF) pasó del 29.5% del PIB en 1999 al 42.5% en el 2003;
 - e) El pago de las pensiones representaba en 2001 el 0.7% del PIB y en 2003 el 1.7%;
 - f) Los pagos de intereses de la deuda llegaron en 2003 al 14.3% de los gastos corrientes del sector público no financiero y en 1999 eran 9.6%;
 - g) Caída del ahorro en los bancos debido a que las tasas de interés de los depósitos son negativas, pues son más bajas que la inflación;
 - h) El déficit comercial a octubre de 2004 es de 2,375 millones de dólares y proyectado al finalizar el año será, conservadoramente, de 2,850 millones, por encima de 2,627 millones en 2003.

Esos indicadores, o esas estadísticas económicas, además de maquilladas, no ocultan el “sentido humano” tras ellas. La economía es, por supuesto, mucho más que números: en más de quince años de neoliberalismo, la economía ha girado alrededor del consumismo, creando artificialmente necesidades y haciendo de los bienes y servicios innecesarios e inútiles en aparentemente necesarios.

Los grandes capitalistas que hegemonizan el control de la economía orientan la inversión de sus cuantiosos recursos en esa dirección, construyendo centros comerciales, enormes “metroplazas” comerciales dentro y fuera del país, llenas de luces artificiales, imágenes y cosas que representan una vergüenza por el símbolo de la opulencia que reflejan y plantean un paraíso en un país lleno de pobreza.

El crecimiento económico se ha dilapidado de esa manera y sus beneficios han ido a parar a manos de un reducido número de familias

opulentas. El espejismo de ese modelo ha terminado llevando a la economía a una situación de inviabilidad que las estadísticas no reflejan y ha despertado en los “sacerdotes” del neoliberalismo la pregunta de ¿qué hacemos y cómo para crecer más?

La oligarquía económica y financiera en particular no encuentran respuesta al respecto. Por ello, uno de los temas derivados de esa interrogante es la búsqueda de nuevos motores para el crecimiento y “relanzar nuestra economía, aletargada durante casi una década”¹ y el atraso en las necesarias reformas “por las retranscas defensivas prevalecientes aún en los círculos del poder decisorio”².

La oligarquía económica y particularmente financiera ha acumulado enormes fortunas, “opulenta e intocable”, ni el gobierno ni nadie más tiene la entereza de enfrentarla, y aunque no es electa por nadie es el poder detrás del trono. Le pusieron límites a la reforma fiscal del gobierno, aprobada por los diputados de derecha en octubre, advirtiéndole al gobierno que “con el sistema financiero no se metiera”.

La reforma fiscal aprobada es en extremo tímida. La oligarquía financiera hizo retroceder al gobierno en sus pretensiones, en privado y hasta en público. La reforma fiscal es una necesidad urgente. El gobierno pudo dar unos cinco pasos adelante en materia de reforma fiscal, contando con el apoyo del FMLN sin confrontar con la oligarquía; pero como es obvio, la intención no era realizar una verdadera reforma fiscal, sino un manejo de los asuntos públicos sin entrar a fondo en las necesidades del desarrollo del país. Al final, las medidas aprobadas son las que por ley deberían estar realizando desde hace quince años que están en el gobierno.

El asunto es que la situación económica del país ha comenzado a alborotar el nido de los grandes empresarios. Para algunos las reformas necesarias, o por lo menos la

¹ La Prensa Gráfica, Editorial “Sobre Nuevos motores de la economía”; 05/10/2004.

² Ib. íd.;

identificación y puesta en marcha nuevos motores para la reanimación de la economía, no pueden “esperar más, porque hacerlo sería atentatorio contra el proceso y contra el sistema”.

Las asociaciones empresariales más representativas del gran capital neoliberal del país no logran ponerse de acuerdo hacia dónde dirigir al país en el campo de la economía y con cuáles “motores” caminar para reducir el riesgo de caer en una crisis, en particular de finanzas públicas, que es la que ven más próxima. El presidente de la ANEP sostiene que FUSADES, el Gobierno y la ANEP van por caminos diferentes³.

¿Qué hacer entonces para salir del atolladero al que los mismos empresarios han llevado a la economía? Aparte de identificar los ansiados nuevos motores para la reactivación económica, como la reanimación agropecuaria, la industria, el turismo y la distribución logística regional, (que realmente no son nuevos motores sino viejos motores) siguen a la espera de la fórmula para salir del hoyo en que se encuentran. Esperan que el gobierno ponga en marcha un nuevo esquema de incentivos de “tercera generación”, tales como el costo compartido de capacitación de mano de obra, incentivos por respeto a las normas laborales y ambientales (como si tal respeto no fuera una obligación legal), la equiparación de beneficios a inversionistas nacionales y extranjeros.

En ENADE 2004, el V Encuentro Nacional de Empresarios⁴ generó expectativas sobre el “giro social” de los empresarios; pero el evento transcurrió en silencio. Según los

promotores del supuesto giro social del mundo empresarial que arrancaría con el evento, en cuatro años de aplicación del modelo de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el país, había llegado el momento para su “masificación” y el V ENADE serviría como plataforma de lanzamiento con el nombre de “El Salvador solidario, el compromiso de todos”.

La agenda de ENADE, se dividida en tres temas: solidaridad, diálogo social y responsabilidad social empresarial, inspirado en la experiencia de FUNDEMÁS y de otros países, en particular de España. Se suponía que estaría en armonía con la agenda social de la campaña electoral de Antonio Saca y sus compromisos políticos al respecto como Presidente de la República, pero el evento no dio respuesta a las propuestas de ENADE al respecto.

Sin embargo, los problemas económicos apremiantes del momento, los cuales fueron presentados principalmente por los industriales y los pequeños y medianos empresarios entre otros⁵, ocuparon la atención del evento empresarial, pero sin encontrar respuestas comunes al respecto. ENADE 2004 en realidad no se desarrolló con la fuerza empresarial suficiente para el “giro social” de la totalidad del empresariado o de la mayoría.

Tres “amenazas” han salido a la superficie que han puesto nerviosos a los empresarios:

- a) El ingreso pleno de la República Popular de China a la OMC a partir de enero de 2005;

³ Según Federico Colorado, presidente de la ANEP, “FUSADES le apuesta al autodescubrimiento, el Gobierno al CAFTA y al desarrollo logístico y nosotros al fortalecimiento de los sectores. Vamos por caminos diferentes cuando debemos converger en un punto, porque ninguna visión es excluyente”; LPG, 06/10/2004.

⁴ Realizado el 10 de noviembre, que tenía que dar respuesta a las inquietudes del momento como lo hizo el IV ENADE del 2003 que respondió a las supuestas amenazas populistas que representaba el FMLN de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 2004.

⁵ Aparte de la reactivación económica, el problema fiscal y otros temas del momento, los intereses de los industriales están relacionados con el estudio del impacto del costo de la energía en general; cómo reducir los costos de producción en el país; el desarrollo de zonas industriales en el interior del país con una política de beneficios especiales. Y buscar para las micros, pequeñas y medianas empresas, incentivos para el acceso a proyectos y compras gubernamentales.

- b) El aparente agotamiento de la sostenibilidad de la dolarización de la economía, y
- c) La aprobación del Presupuesto General del Estado para el 2005.

Por lo que respecta a la República Popular China, ya nadie en el mundo pone en duda que este “gigante” se convertirá dentro de unos cuantos años en la segunda potencia económica mundial y después, allá por el 2050, en la primera.

En pocos años China pasó de ocupar el lugar número 36 al 6 en la economía mundial. La República Popular de China que construye su modelo global de sociedad socialista con “peculiaridades” chinas ya es principal productor de productos electrónicos (computadoras, teléfonos móviles, cámaras y filmadoras digitales y otros), de vehículos, vestuarios (textiles, zapatos, etc.), equipo y maquinaria para usos agrícolas e industriales. Su turismo interno e internacional crece a pasos agigantados. Sus productos llegan ya a casi todos los países del planeta, tenga o no relaciones diplomáticas y comerciales con los mismos, como es el caso de nuestro país.

La República Popular de China invierte excedentes en los Estados Unidos, adquiere bonos del tesoro del Estado norteamericano y realiza grandes exportaciones al mercado estadounidense, ahora bajo ciertas restricciones⁶. Es esto último lo que tiene “asustados” a los empresarios salvadoreños y extranjeros, principalmente maquileros, que ven el riesgo de su desplazamiento del mercado estadounidense.

Empresarios y gobierno chocan en la estrategia ante lo que ambos llaman la “amenaza china”. Mientras algunos empresarios sostienen que China genera riesgos para la economía salvadoreña, pero que también ofrece posibilidades y oportunidades y en consecuencia deben

establecerse relaciones diplomáticas y por supuesto comerciales; gobierno y dirigentes de ARENA mantienen la posición de que las relaciones de Estado sólo deben ser con Taiwán, posición ideológica y política de compromiso tanto con los taiwaneses como con los gobiernos estadounidense y centroamericanos.

La RPCH tiene relaciones diplomáticas con 164 países; Taiwán con 26. La RPCH es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU; Taiwán no es miembro de la ONU ni tiene asiento en ninguna calidad en dicho organismo, pese al respaldo de los gobiernos estadounidenses al respecto.

La posición del gobierno salvadoreño da la espalda al curso de los acontecimientos históricos, necesidades y conveniencias para el país. Es la posición impuesta por las más de cuatro décadas de guerra fría que hace quince años pasó a ser historia para la humanidad.

La **dolarización** ha fracasado en el logro de los objetivos que por “naturaleza” se dijo alcanzarían la reactivación de la economía: el aumento de la inversión privada por la reducción de las tasas de interés, la atracción en ascenso de la inversión extranjera por la confianza que la dolarización generaría y la eliminación del “riesgo cambiario”, animar el desarrollo del “mercado de capitales” (bolsas de valores), que incidiría en la conversión del país en una plaza regional, y luego internacional, para transacciones financieras. Todo ello, incidiría en la creación de miles de plazas de trabajo y elevar las condiciones de vida de la población del país.

Nada de eso se logró, en cuya promoción y propaganda gobierno y empresarios mucho dinero gastaron. En privado se dijo que a quienes se “apretaría” para que el país mejorara, era a los banqueros. En realidad fueron éstos los principales beneficiados, los que se aprovecharon de la dolarización para imponer al país el arte empresarial de cómo amasar fortunas con el apoyo gubernamental.

La dolarización, además, se impuso para quitarse la presión de los exportadores que

⁶ Además de “invadir” a América Latina con mercaderías, China invertirá en los próximos años unos 100 mil millones de dólares.

exigían la devaluación del colón, porque los perjudicaba al recibir la mínima cantidad de colones por cada dólar de sus exportaciones, cuando debían recibir cada vez más colones.

En cambio, ocurre que después de casi cuatro años de dolarización, el dólar se ha devaluado en cerca del 40% respecto al Euro y en porcentajes menores en relación a otras monedas europeas y asiáticas. Ahora el país tiene que proporcionar más dólares por lo importado de Europa y Asia, y quién sabe si esto ocurre con las importaciones a Estados Unidos y al resto de países de América Latina.

Las exportaciones salvadoreñas no constituyen la base principal de la dolarización, pues la economía se convirtió en una economía importadora que vino a profundizarla la dolarización misma.

La dolarización pasó a descansar, con mayor profundidad, en las remesas y el endeudamiento público, en particular. El endeudamiento mediante la emisión y colocación de bonos estatales que traen centenares de millones de dólares frescos al país; pero aún así, el cuestionamiento a la sostenibilidad o continuidad de dolarización ha comenzado a deslizarse dentro de la gran empresa. De la misma manera que ha comenzado a deslizarse la idea de volver a la circulación del colón, a causa de la escasez de dólares que se ocasiona por la fuga de los mismos que se ha estado produciendo en los últimos meses.

Debido al abultado déficit comercial que aumenta año con año, es decir, que salen más dólares que los que ingresan, aparte de la fuga de los mismos, al aumento en el pago del servicio de la deuda pública externa, a un déficit fiscal que no hay manera de frenarlo y reducirlo, y con una economía con el “freno” de mano de la misma dolarización, ésta es insostenible. Una realidad ahora insostenible mientras la economía se mantenga en problemas como lo está.

La situación fiscal, espejo principal y casi el único del funcionamiento de la economía, también se encuentra atascada en “callejón

sin salida”, y acude al endeudamiento y con ello al alargamiento de ese callejón.

La crisis de finanzas públicas es consecuencia del “rumbo neoliberal del modelo económico cuyas actividades económicas principales no generan suficientes ingresos al Estado”⁷. A causa de los intereses de los grandes capitalistas que defiende, la llamada carga o presión tributaria se ha mantenido en 10.2% (relación entre impuestos y PIB), insuficiencia de ingresos que el gobierno ha enfrentado siguiendo el camino cómodo del endeudamiento.

Ese camino expresa el carácter estructural de la crisis de las finanzas públicas y en esencia la composición de los intereses económicos protegidos. Que exige, por lo mismo, una reforma estructural profunda, un cambio de rumbo distinto al paquete de reformas que propone ANEP y FUSADES y por supuesto a

⁷ Los exportadores de productos no tradicionales fuera de Centro América, los privilegiados del modelo, no pagan impuestos, contrariamente reciben el subsidio del 6% del valor de sus exportaciones; a todos los exportadores sin exclusión, el Estado les devuelve el IVA que pagan por los insumos adquiridos en sus actividades productivas; el Estado continúa pagando centenares de millones en intereses y recuperación de bonos emitidos para la privatización de la banca; al privatizarse las empresas estatales el Gobierno dejó de percibir el 25% de las utilidades de las mismas que por ley debían ser transferidas al Fondo General; al privatizarse empresas estatales, el Gobierno dejó de acudir a la caja de las mismas para resolver problemas de liquidez temporal, para cubrir necesidades temporales de financiamiento; con la apertura comercial, firma de TLCs y reducción de aranceles a las importaciones, el Estado deja de percibir anualmente sumas importantes de ingresos; la política tributaria redujo la tasa máxima del impuesto sobre la renta del 60% al 25% a los empresarios (grandes capitalistas), derogó el impuesto a la riqueza o patrimonio y otros impuestos para beneficiar a los grandes capitalistas con lo cual el Estado dejó de percibir ingresos; al hacerse del “ojo pacho” ante los evasores y los que se apropian ilegalmente de los impuestos pagados por el pueblo, como el IVA, el Estado ha dejado de percibir la mitad de impuestos que no llega a la caja fiscal; con la política de la elusión tributaria, es decir, pagar menos impuestos al amparo de la legislación aprobada para favorecer a los más poderosos económicamente, como los bancos que en lugar del 25% del impuesto sobre la renta pagan en promedio cerca del 10%, también el Estado no percibe ingresos que debería obtener.

la tímida reforma fiscal aprobada en octubre, cuyos resultados esperados (unos 160 millones de dólares), apuntan a mantener los privilegios de las argollas de grandes capitalistas y socar más a las capas medias y gente pobre⁸.

Pero uno de los problemas que angustia al gobierno y organismos internacionales, principalmente al FMI, es la creciente falta de liquidez o de dinero efectivo para cubrir, dentro del ejercicio fiscal, gastos y compromisos con vencimiento de pago, incluyendo los pagos de intereses y amortización de la deuda de mediano y largo plazo; y la llamada deuda de corto plazo originada mediante la emisión de Letras de Tesorería o LETES, con las cuales es aliviada la necesidad temporal de liquidez o de efectivo y se transforma en un problema de insolvencia o falta de capacidad de pago de esa misma deuda.

El gobierno emite y coloca LETES cada vez que no puede pagar sus compromisos con ingresos corrientes dentro del ejercicio fiscal, como debiera ser. Y esas LETES acumulan una deuda que tampoco puede pagar. Para ello emite otros bonos a pagar en el mediano plazo y acude a los recursos de la venta de empresas estatales. Como se hizo en 1998 que el gobierno utilizó 360 millones de dólares obtenidos por la venta de las distribuidoras de energía eléctrica para cumplir con esos compromisos de pago inmediato ya vencidos; o como sucedió en el 2002 que colocaron 711 millones de dólares en bonos para pagar esos “pagarés” llamados LETES.

Entonces ese endeudamiento trae funestas consecuencias para el país. En 1993, cuando comenzaron los programas neoliberales de ajuste estructural de la economía, la deuda pública del Sector Público No Financiero, SPNF, representaba el 38.0% del PIB. Diez años después, en 2003, esa carga para el pueblo se elevó a 45.5, muy por encima del techo del 40% que el mismo gobierno se ha fijado como límite crítico del endeudamiento.

En el año 2004 ascenderá a cerca del 47.0%, con la perspectiva que a finales del 2005 se eleve alrededor del 50.0%, de aprobarse en la Asamblea Legislativa la emisión de 541.8 millones de dólares en bonos solicitados por el Gobierno para financiar el déficit del Presupuesto 2005.

⁸ El paquete consiste en lo siguiente: eliminación de subsidios al diesel y gas licuado y a exportadores no tradicionales; reducción de empleos públicos; reducir IVA a exportadores; ampliar base tributaria aprobando régimen simplificado o impuesto único a sector informal de la economía; eliminar deducciones por gastos de educación y salud; eliminar facilidad de pensionarse con 30 años de servicio y aumentar en cinco años la edad de retiro a hombres y mujeres; concesionar puerto de Acajutla, aeropuerto de Comalapa, el Zoológico, Correos, Imprente Nacional, Lotería Nacional, turicentros, sitios arqueológicos, ferrocarriles; vender acciones del Estado en CTE/ANTEL y continuar con las privatizaciones.

SPNF: DEUDA Y PIB POR HABITANTE 1993, 1999, 2000 y 2003

AÑOS	PIB ^{1/} (millones dólares)	DEUDA (millones dólares)	POBLACION (miles de habitantes)	DEUDA POR HABITANTE (dólares)	PIB POR HABITANTE (dólares)
1993	6,956.6	2,645.2	5,508.4	480.2	1,231.4
1999	12,464.7	3,820.8	6,154.3	620.8	2,205.4
2000	13,134.1	3,894.8	6,276.0	620.6	2,092.7
2003	14,940.9	6,796.2	6,638.2	1,023.8	2,250.8

1/ PIB a precios corrientes

Fuente: Ministerio de Hacienda, Informe de Gestión Financiero del Estado, 1993,1999, 2000 y 2003 (Pág.-46, 50 y 118); BCR, revista Trimestre, julio-agosto-septiembre 1995 y abril-mayo-junio 2004.

Entre 1999 y 2003 el saldo de la deuda externa aumentó de 2,191.5 millones de dólares a 5,010.5 millones. Es decir, 2,819.0 millones de dólares, 76.4% de los cuales corresponde a aumento de la deuda externa por la colocación de bonos (2,153.5 millones de dólares).

De toda la deuda externa contratada hasta 1993, el Gobierno Central había utilizado 3,060.7 millones de dólares. En los siguientes diez años, hasta el 2003, el gobierno utilizó 6,933.7 millones de dólares. O sea, un aumento de 3,873.0 millones de dólares y de estos 2,153.5 millones en bonos (55.6%).

¿Para qué sirvieron esos millones de dólares? Un gran porcentaje para financiar los llamados programas de ajuste estructural con los que arrancó el neoliberalismo en los primeros años de los noventa. Otro para financiar la llamada modernización estatal; otra parte para inversiones en infraestructura. Y el endeudamiento en bonos, para cubrir la falta de recursos para financiar los gastos presupuestarios sin destino específico y para pagar las deudas a los proveedores de materiales y servicios que debían cubrirse con ingresos corrientes.

Prácticamente nada de esos recursos se invirtió para dinamizar las actividades económicas. Principalmente aquellas generadoras de oportunidades de empleo a los salvadoreños y evitar que entre 70 y 80 mil personas “huyan” anualmente del país por

razones económicas y sean ahora quienes envíen las remesas, el principal “flotador” de la economía del país.

Según el Art. 148 de la Constitución de la República, el endeudamiento sólo procede “cuando una grave y urgente necesidad lo demande”. Sin embargo, la adquisición de deuda por el gobierno se ha hecho rutinaria debido a que el modelo neoliberal le restó capacidad económica para cubrir sus necesidades corrientes.

En 1993 el endeudamiento adquirido por el gobierno⁹ era de 480.2 dólares anuales. Diez años después, en 2003, esta carga trasladada por los neoliberales en el gobierno a los habitantes del país desde que nacen, se aumentó a 1,023.8 dólares; o sea un aumento del 113.2% en tan corto período (ver cuadro arriba).

La inmensa mayoría de salvadoreños no tienen idea de hacia dónde fueron a parar la gran cantidad de dólares recibidos por el gobierno por préstamos y emisión de bonos, sobre todo por el alto porcentaje de la población que “vive” en condiciones de extrema pobreza, que apenas puede respirar con menos de un dólar diario, o esa elevada proporción de personas desempleadas que sobreviven de los despojos del sistema.

⁹ A pagar por tiempo perpetuo por cada salvadoreño y sus hijos, y los hijos de sus hijos.

Pero el promedio simple de deuda por habitante es en realidad más alto, debido a que la carga del endeudamiento. Igual sucede con la carga o presión tributaria, es decir, la relación porcentual de los impuestos pagados respecto al PIB, recae sobre una parte más reducida de la población, sobre la que pesa la responsabilidad de generar valor agregado aunque sea con salarios de sobrevivencia.

Si se compara endeudamiento por habitante y PIB por habitante, resulta que en 1993 la relación era de 39%, en 2000 de 29.7% y en 2003 subió a 45.5%. ¿Qué significa semejante relación? Mientras entre 1993 y 2000 el crecimiento del PIB por habitante fue mayor que el del endeudamiento por habitante, en el corto período del 2000 a 2003, la carga del endeudamiento por persona creció bruscamente, o a una velocidad mucho mayor que la del PIB por persona.

De esta manera ha dejado de ser una carga y ha pasado a convertirse en una sobrecarga para las presentes y futuras generaciones, principalmente de jóvenes, hombres y mujeres, que durante toda su vida económicamente útil son “exprimidos” por el sistema y además por el pago del endeudamiento público, del que se benefician principalmente las argollas económicas que controlan gobierno y país.

A medida que el endeudamiento externo aumenta aceleradamente y su composición o estructura cambia, soportada cada vez más la deuda en bonos, entonces la deuda se vuelve más cara o más onerosa. En 1998, por ejemplo, el endeudamiento mediante la colocación de bonos o títulos valores apenas representaba el 0.7% del total del endeudamiento del Gobierno. En 2003 llegó a representar el 43.0% y para 2005 se espera o proyecta que se eleve al 51.5%, desplazando a la deuda en préstamos a organismos internacionales o multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica) y a gobiernos extranjeros.

Una estructura del endeudamiento que cambia de esa manera, aleja las posibilidades

de respuestas económicas a las demandas sociales del pueblo y la llamada “deuda social” crece más y más.

Todos los años, desde 1993 el pago del “servicio” de la deuda pública del sector público no financiero ha superado los gastos ejecutados en educación. Por ejemplo, en 1993, fue superior en 49.7% y en 2002 en 169.5%. En el 2003 el pago de la deuda, amortización e intereses, superó a los gastos en educación en 36.0%. En el período, 1993-2003, los recursos absorbidos por la amortización y pago de intereses de la deuda pública fueron 62.8% superiores a los destinados a educación.

La comparación con los recursos ejecutados para la prestación de servicios públicos de salud, excluyendo al ISSS, la situación es más dramática. En 1999 el pago de deuda fue superior en 195.1% a los gastos en salud pública asignados al Ministerio de Salud y Asistencia Social y en 2003 la diferencia fue de 165.1%.

Hasta el año 2002 los recursos asignados a educación en el Presupuesto General del Estado ocupaban la mayor cuota con el 19%. De 2003 en adelante, el pago del servicio de la deuda ha pasado a ocupar la mayor parte, por arriba del 19%, y educación relegada a segundo plano.

En realidad las finanzas públicas están en “bancarrota”. El Estado no tiene capacidad financiera para cubrir los pagos de la deuda y las pensiones y entonces no le queda opción más que el endeudamiento y el más fácil, el acudir a la emisión y colocación de bonos para traer al país centenares de millones de dólares frescos luego de una sola operación.

Sin endeudamiento de esta manera, el Gobierno simplemente no puede hacerle frente o responder a sus obligaciones financieras. La responsabilidad de su fracaso la traslada impunemente al pueblo, trasladando los costos presentes y futuros de más endeudamiento, incluso para pagar endeudamientos pasados.

Ocurre que ahora parte de los fondos de pensiones, esto es de los ahorros forzosos para pensiones de los trabajadores se invierten en bonos del Estado que éste en verdad no tiene con qué pagar. Ahora necesita centenares de millones de dólares mediante la colocación de más bonos para cubrir esos compromisos y mañana necesitará la emisión y colocación de más papeles y así continuará la cadena del endeudamiento, con la tranquilidad que actúan los gobiernos demagogos, corruptos e irresponsables, confiados en que son inmunes a la institucionalidad y a la ley. Por otra parte, la propaganda presenta a los bonos fuera de todo riesgo financiero cuando la vida apunta a que por ahora y en el futuro inmediato, y mediano, no gozan del respaldo necesario.

El endeudamiento mediante la colocación de bonos le permite al Gobierno esconder la bancarrota fiscal, que arrastra desde 1998 en que comenzó a arrojar déficit corrientes, el peor resultado de las finanzas públicas en crisis. Entre 1998 y 2003, el Gobierno

acumuló 553.0 millones de déficit corrientes, es decir la ejecución de gastos de operación sin financiamiento.

¿De dónde saldrían los recursos para cubrir esos gastos no cubiertos con los recursos ordinarios o corrientes como lo establece la ley y la sana gestión de las finanzas públicas? Del endeudamiento de corto plazo o lo que se conoce como deuda flotante mediante la colocación de LETES o una especie de “vales” u órdenes de pago con un descuento determinado del que hacen “negocio” los especuladores financieros.

El sentido común sugiere que para que pueda haber inversión es absolutamente necesario que exista ahorro y específicamente, ahorro corriente, es decir, más ingresos corrientes que gastos corrientes. Esto da lugar a la siguiente premisa: el ahorro corriente debe ser fuente principal y primaria para el financiamiento de la inversión, de manera que el endeudamiento sea un complemento del ahorro.

GOBIERNO CENTRAL: SUPERAVIT Y DEFICIT CORRIENTES, 1993-2003
(Millones de dólares y %)

AÑOS	INGRESOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES	SUPERAVIT/DEFICIT	
			millones	% de ingresos corrientes
1993	778.8	711.2	67.6	8.7
1994	1,014.4	912.9	101.5	10.0
1995	1,218.1	1,101.4	116.7	9.6
1996	1,259.3	1,179.7	79.6	6.3
1997	1,344.6	1,256.2	88.4	6.6
1998	1,372.6	1,428.7	(56.1)	(4.1)
1999	1,444.2	1,454.8	(10.6)	(0.7)
2000	1,585.6	1,586.1	(0.5)	(0.0)
2001	1,536.4	1,744.7	(208.3)	(13.6)
2002	1,739.5	1,940.1	(200.6)	(11.5)
2003	1,881.4	1,958.3	(76.9)	(4.1)

Fuente: Ministerio de Hacienda, “Informes de la Gestión Financiera del Estado”, 1993-2003.

Como ya se dijo, a partir de 1998 el Gobierno Central no genera ahorro corriente sino déficit, en una clara señal de que las finanzas públicas atraviesan dificultades estructurales, no sólo temporales o coyunturales. El

gobierno debe tener como meta generar ahorro pues éste constituye, en teoría y práctica, fuente importante para financiar necesidades de la inversión pública. Cuando esto no ocurre entonces se endeuda para

cubrir gastos corrientes, lo cual es técnicamente negativo, y también legalmente pues la ley prohíbe endeudamiento público para financiar gastos corrientes (Art. 92, ley AFI).

Ante el déficit corriente, las finanzas públicas requieren ajustes fuertes tanto por el lado de los ingresos o gastos, como lo ha estado haciendo el gobierno en los últimos años, suprimiendo decenas de miles de plazas para reducir gastos corrientes.

Los gastos corrientes que más aumentan sin detenerse año con año, son el pago del servicio de la deuda pública, que aumenta abruptamente, principalmente el pago de intereses de la deuda en bonos, y el pago de pensiones del sistema público a causa de que el INPEP y el ISSS se quedaron sin recursos para cubrir sus obligaciones para el pago de pensiones. En 2002 el pago de pensiones y de servicio de la deuda, sin incluir rescate de LETES, absorbieron el 38.5% de los ingresos corrientes; incluyendo LETES, el porcentaje se elevó a 74.4%.

El endeudamiento en bonos es otro gran “flotador” que mantiene oxigenada a la economía y especialmente a las finanzas públicas, tanto para financiar el déficit del Presupuesto General de la Nación, como para respaldar la dolarización. Para 2005, el gobierno ha estimado un déficit de 700.3 millones de dólares, a financiarse mediante 158.5 millones por desembolsos de préstamos ya contratados o aprobados, más la emisión de bonos por la cantidad de 541.8 millones de dólares, todavía no aprobados por la Asamblea Legislativa que necesita de 56 votos para ello.

El Gobierno ha tenido que acudir a una trampa financiera para esconder el déficit presupuestario, reduciendo a 158.5 millones de dólares el financiamiento con nuevos desembolsos de préstamos, existiendo la posibilidad o disponibilidad de un poco más de 800 millones de dólares por ese concepto. Al incluir una mayor cantidad de desembolsos de préstamos aumentaría automáticamente el tamaño del déficit

presupuestario y ello haría quedar mal al gobierno ante organismos internacionales, como el Banco Mundial, el BID y FMI.

Es probable que otros desembolsos, junto con los ingresos tributarios adicionales de la reforma fiscal presentada ante la Asamblea Legislativa, sean utilizados como ingresos para el financiamiento de un probable Presupuesto Extraordinario para varios años, por lo menos dos, con vistas a las elecciones de marzo de 2006.

El Gobierno y ARENA siguen el Camino Dictatorial y Atado al Neoliberalismo

Los últimos meses se han caracterizado por el hecho de que la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia son dos órganos de gobierno que han estado trabajando para el Presidente de la República en especial, avalando violaciones legales y constitucionales, como la usurpación de uno de los cargos de magistrado del TSE por un miembro del PCN con la bendición de la Corte Suprema de Justicia; la decisión de mantener con vida a los partidos PCN y PDC, cuando por los resultados de las elecciones presidenciales del pasado marzo tenían que haber desaparecido legalmente.

Al aprobarse en octubre por los diputados de ARENA y el PCN lo que llaman reforma fiscal, se pasó por encima de lo acordado en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, después de semanas de debates y entendimientos logrados con este esfuerzo político.

En los últimos días de noviembre, los mismos diputados aprobaron la Ley de Libre Competencia, enviada por el ejecutivo mediante la maniobra inconstitucional de no someterla a discusión de la Comisión de Economía y Agricultura. Echando al “basurero” el proyecto de ley que por más de seis años se venía discutiendo y que había logrado entendimientos en dicha Comisión y en otra creada para tal propósito.

El 1º de diciembre el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del TLC de los gobiernos centroamericanos con el de los Estados Unidos y nada sorprendente sería que se repita la misma “historia”; es decir, que sea ratificado sin la necesaria discusión, acción reclamada incluso por el Arzobispo de San Salvador.

Los propietarios de los medios de prensa también se han puesto al servicio del Presidente de la República. Enterados de toda

esa situación han montado un cerco contra la verdad, al punto de negarse a publicar comunicados informando a la población de la oposición, particularmente del FMLN, respecto a esos temas, o prohibiendo a los radios del país la difusión de mensajes en el mismo sentido.

El asunto es que entre más se complica la situación económica del país, el Gobierno y ARENA más insisten en la aplicación de medidas de tendencia claramente dictatoriales y buscan aun más control sobre lo que estorba políticamente. La perspectiva del país en ese sentido se vuelve más oscura.

Por ejemplo, ahora que necesita la aprobación del Presupuesto General del Estado para 2005, el Gobierno mantiene una campaña de mentira y la falsedad ante la población, acusando principalmente al FMLN de irresponsable y terco. El gobierno sólo necesita de los votos de ARENA y del PCN para aprobar el Presupuesto General de la Nación y no quiere nada de la bancada del FMLN. En realidad, lo que necesita del FMLN son los votos para la emisión de los 541.8 millones de dólares en bonos¹⁰.

Y para presionar aun más, se les ha ocurrido que la tanto la Asamblea Legislativa como la Corte Suprema de Justicia, castiguen a los diputados que se nieguen a votar por la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2005 antes de que finalice diciembre de 2004.

El endeudamiento en bonos, como ya se ha dicho, constituye en realidad parte de la tapadera del túnel por ahora sin salida de la política fiscal y en cierto modo de la

¹⁰ El 2 de diciembre, el FMLN propuso en una carta dirigida al presidente Saca que se renunciara al endeudamiento de 541.8 millones de dólares en bonos debido a que se destinan a inversión social, por su carácter oneroso, por lesivo al interés nacional y por el enorme peso que significa para la población del país y se sentara a discutir una solución a la crisis de ingresos que evite ese endeudamiento y se dé respuesta a las necesidades de inversión en salud pública, educación, el servicio de agua, subsidio focalizado al transporte público y mejoramiento de las pensiones.

dolarización. Pasarán algunos meses antes de que a esta situación se encuentre salida sin que el gobierno y ARENA mantengan la vía dictatorial de solución de los principales problemas del país.

LAS ELECCIONES INTERNAS DEL FMLN

Las elecciones internas del 7 de noviembre de 2004 para elegir autoridades del FMLN para el período 2005-2007, fueron las segundas elecciones primarias realizadas mediante el voto directo y secreto de los afiliados, después de las primeras de noviembre de 2001. Fueron electas todas las autoridades del partido: Coordinador General; miembros del Consejo Nacional, de entre ellos la Coordinación Adjunta que por Estatuto debe ser una mujer; delegados para a la nueva Convención Nacional; coordinadores departamentales y municipales; y miembros de directivas departamentales y municipales.

Antes de 2001 las autoridades nacionales del partido eran electas en la Convención Nacional y las autoridades locales en las convenciones o asambleas departamentales y municipales, por lo general mediante voto a mano alzada. El Coordinador General, igual que los miembros de la Comisión Política, eran electos en el Consejo Nacional.

Esa atribución electiva de las convenciones se trasladó a los afiliados y a aquéllas les quedó la atribución de decidir o resolver sobre los asuntos estratégicos y legales (reforma a Estatutos, aprobación de Programa y plataformas), quedando en manos de la Convención Nacional, la elección de miembros al Tribunal de Ética y al Tribunal Electoral del partido. Los miembros de estos dos organismos serán electos en Convención Nacional del 12 de diciembre de 2004.

El FMLN es el único partido político del país que realiza elecciones internas para la elección de sus autoridades nacionales y locales. Así como las candidaturas a ocupar cargos de elección popular (candidato a la Presidencia y Vicepresidencia de la

República, candidatos a diputados, candidatos a Alcaldes de los municipios y miembros de Concejos Municipales).

ARENA le declaró la guerra a estas elecciones como una forma de lucha política contra el FMLN. Atacándola con sus medios de prensa sin reconocer o ver absolutamente nada positivo para la democratización del país y concentró todos sus instrumentos en descalificarlas y desacreditarlas. Su objetivo político es utilizar las elecciones internas del FMLN para dividirlo y mostrar ante el pueblo una imagen de división para que el país vea en el FMLN un partido incapaz de entenderse y gobernarse internamente y, en consecuencia, incapaz de gobernar al país.

Los Resultados de las Elecciones y su Significado Político

De los 46,874 votos válidos para Coordinador General del FMLN el candidato de la corriente revolucionaria, Medardo González o “Milton” obtuvo 25,270, o sea el 54.0% y Oscar Ortiz, candidato de la coalición, una mezcla de personas y agrupamientos que bajo la bandera de la Fuerza del Cambio incluyó a quienes se consideran socialdemócratas, pero que lo niegan o lo esconden, obtuvo el 46.0%. La votación total fue superior al 52% de los inscritos para votar, mucho más que en las elecciones de 2001.

De los 35 candidatos al Consejo Nacional, todos los que ganaron pertenecen a la corriente revolucionaria y ninguno a aquella coalición bautizada por los medios de prensa como reformistas. De éstos, sólo participarán en el Consejo Nacional de 57 miembros, tres coordinadores departamentales (los de La Libertad, Chalatenango y San Vicente, y el Coordinador del Consejo de Alcaldes, Oscar Ortiz).

Antes, la Corriente Revolucionaria había ganado las elecciones de las Secretarías de la Mujer y la Juventud del partido, cuyos coordinadores pasan a ser miembros del Consejo Nacional y de la Comisión Política

de 17 miembros, 10 de los cuales son electos en el Consejo Nacional.

Las elecciones estuvieron precedidas de intensas disputas en las que los medios de prensa no disimularon sus simpatías por los grupos que calificaron como reformistas, moderados, portadores de un proyecto viable, “realista” y “potable” para quienes controlan el país, y en general, como los representantes de posibles entendimientos favorables para la gobernabilidad y estabilidad política y social del país.

En el fondo, coinciden con voceros de ARENA en el “propósito de debilitar y hasta destruir el proyecto revolucionario, no al FMLN en sí, que ha probado ser una real amenaza para su modelo de dominación”. Es decir, a las fuerzas revolucionarias presentadas por los medios de la derecha como “ortodoxos” o “conservadores”, como un estorbo al neoliberalismo o a la economía social de mercado, es así como la derecha trata de disfrazar en algunos discursos de la doctrina neoliberal.

La “fuerza del cambio” no se atreve públicamente a presentarse como social demócrata. Ideas que no son novedosas al interior e historia del frente, sin que por ello se haya dejado de impulsar un programa de lucha por los cambios que el país necesita. No tuvieron la entereza de presentar su pensamiento, sus ideas, sino que creyeron que presentándose como “enemigos” de los “métodos” y “procedimientos” de Schafik y no de su pensamiento ni del ideario del FMLN - con el que según sus discursos seguían identificados y defendiendo- tomarían fuerza. Con dicha estrategia atraerían a la mayoría de los afiliados del partido y desplazarían a la actual dirección del partido. Propósito que no lograron inmediatamente después de las elecciones presidenciales de marzo, conspirando ingenuamente un complot para su renuncia.

Uno de sus principales ideólogos, Julio Hernández, incomodo por haber sido desplazado como representante magistrado del FMLN en el TSE, se lanzó desde marzo en contra de Schafik y Salvador Sánchez Cerén.

En junio pasado, afirmó que si el FMLN desea aspirar con seriedad a las presidenciales de 2009, “no queda otra alternativa que contribuir a que el FMLN cambie y renueve su posicionamiento e imagen. No se trata solamente de cambio de caras, si no de ideas que estén a tono con la realidad nacional y el complejo mundo de hoy”.

Esa es precisamente parte de la esencia del pensamiento o las ideas social demócratas, estar a “tono con la realidad nacional”, no luchar para cambiar la realidad nacional como lo indica el pensamiento o ideario revolucionario del FMLN.

Los resultados de las elecciones internas del 7 de noviembre de 2004 es un llamado de atención para quienes apoyaron y respaldaron a los llamados reformistas, a esa amalgama de dirigentes de pensamiento social demócrata, como sinónimos de revolucionarios unos, como de izquierda democrática otros. Y por supuesto, también es para la investida de los voceros de ARENA para debilitar al FMLN.

Por otra parte, el 11 de noviembre apareció un nuevo esfuerzo “de izquierda” encabezado en su mayoría por otra amalgama de ex miembros del FMLN, presentándose en el acto público de nacimiento con el bautizo socialdemócrata a la europea y con respaldo socialdemócrata europeo, en particular el español.

¿Es ese nuevo intento en esencia igual o lo mismo que los de septiembre de 1994 (Joaquín Villalobos y su PD) y 2003 (Facundo y su PMR), que no levantaron cabeza? ¿Se trata de una socialdemocracia a la europea o a la española que no fructifica, que fue propia de los años de la guerra fría, incluyendo los partidos socialdemócratas que vivieron en América Latina y terminaron desapareciendo?

El proceso de las elecciones internas en el FMLN evidenciaron que, quienes en privado se identifican como socialdemócratas o quienes tienen un pensamiento difuso y actúan con sentido práctico y hasta empírico, parten de una visión exclusivamente electoral

y de la premisa que da base a dicha visión de que “en El Salvador, cualquier política de izquierda, o es socialdemócrata o es mentira populista”.

Bajo ese enfoque no queda espacio para la lucha por la revolución democrática. Según Julio Hernández, por ejemplo, “si el Frente no hubiese equivocado el camino (al elegir el candidato a la Presidencia), ahora estaríamos iniciando un gobierno democrático y progresista, asumiendo el poder (sic) y no frente al inicio del cuarto gobierno de ARENA”.

Para Julio, “el FMLN es un actor fundamental de la política nacional y su participación es determinante para establecer una agenda de gobernabilidad”. Y de cara a las elecciones de 2006 y 2009, “implica establecer un diálogo constructivo con el gobierno de Saca y, construir una agenda de gobernabilidad”, a fin de presentar una nueva imagen de confiabilidad.

Las elecciones de noviembre han concluido, pero la lucha por la conducción del partido continúa mediante la lucha de ideas, ya sea alrededor de la identidad con el proyecto de la revolución democrática y el rumbo al socialismo, así como en torno al programa y estrategia para el período 2005-2006 y más allá hasta 2009.

En 2005 habrá de nuevo elecciones internas para candidatos a diputados, alcaldes y concejos municipales. Las elecciones del pasado 7 de noviembre significaron un paso hacia la consolidación de la institucionalidad del partido: la competencia electoral y en realidad confrontación política electoral interna, atizada por los medios de prensa del gran capital, dejaron atrás aquellas “elecciones” de candidatos o autoridades previamente seleccionadas mediante acuerdos políticos internos, o mediante el reparto de cuotas de candidatos y cargos en organismos de dirección, acordadas o negociadas entre agrupamientos o corrientes de pensamiento dentro del partido.

La desaparición de dichos arreglos o acuerdos políticos para decidir quienes serían de antemano los candidatos y la definición de los mismos es una fase que también debe quedar atrás para que la elecciones en 2005 signifiquen un avance del proceso en la democracia interna del partido.